

Santiago, catorce de marzo de dos mil veintitrés.

Al folio 64: estese a lo resuelto.

Visto y considerando:

PRIMERO: Que comparece Fernando Molina Lamilla, abogado, Director Jurídico de la Universidad de Chile, en nombre y representación convencional de la referida Institución de Educación Superior, interponiendo Reclamo de Ilegalidad en conformidad a los artículos 28, 29 y 30 de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública (“Ley N° 20.285” o “Ley de Transparencia”), en contra del Consejo para la Transparencia (en adelante “el Consejo” o “el CPLT”); por haber incurrido en infracciones de ley con ocasión de la dictación de su Decisión de Amparo pronunciada en caso Rol C4572-21 de 12 de octubre de 2021, respecto de aquella parte que acoge parcialmente el amparo, solicitando se deje sin efecto la resolución impugnada y se disponga el rechazo del amparo.

Indica que La Universidad de Chile es una Institución Pública que presta servicios a particulares con fundamento en los artículos 8° del Estatuto Orgánico de dicha Casa de Estudios y 39 de la Ley N° 21.094, que vino a regular las Universidades Estatales.

Relata los siguientes hechos:

Que con fecha 12 de mayo de 2021, Diego Gallegos (en adelante, indistintamente, “el requirente” o el “solicitante”), ingresó una Solicitud Electrónica de acceso a Información Pública de la Universidad de Chile, pidiendo lo siguiente:

“1- TODOS LOS INFORMES, ANÁLISIS, RESULTADOS U OTRA EXPRESIÓN EQUIVALENTE ASOCIADO AL contrato suscrito por la Universidad con Iansa Alimentos S.A., de fecha 29 de enero de 2019, así como la Cesión efectuada por dicha entidad a LDA SpA, suscrita con fecha 2 de enero de 2020, y la Resolución Exenta (ADM) N°223 del Sr. Decano de la Facultad, de fecha 13 de mayo de 2020, aprobatoria de ambos instrumentos; 2- LOS ESTUDIOS HISTOPATOLÓGICOS REALIZADO EN ANIMALES QUE NO FUERON ENTREGADOS AL SAG POR SUPUESTA IMPOSIBILIDAD DE DETERMINAR TRAZABILIDAD; ANTECEDENTES DE LA DECISIÓN DE NO ENTREGAR ESTOS ESTUDIOS AL SAG; TODO SEGÚN CONSTA EN EXPEDIENTES ACUMULADOS N° 201313568 Y 201313632 SEGUIDOS EN EL SERVICIO AGRÍCOLA GANADERO; 3- SE ME INFORME SI LOS CONTRATOS SINGULARIZADOS EN EL PARRAFO 1 PRECEDENTE SIGUEN VIGENTES; EN LA AFIRMATIVA EXHIBIR TODOS LOS ANTECEDENTES QUE REGULEN LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS



PARTES, COMO CONTRATOS, ANEXOS, CONVENIOS, MODIFICACIONES, OTRAS EXPRESIONES EQUIVALENTES”.

Que con fecha 10 de junio de 2021, la Unidad de Transparencia de la Universidad de Chile respondió la solicitud del requirente mediante Oficio U.T. (O) N° 182/2021, denegando la entrega de la información requerida, en virtud de las causales establecidas en el artículo 21 N°2 y N°1 de la Ley N°20.285, y de la oposición del tercero afectado con la divulgación de aquella.

Posteriormente, ante la respuesta otorgada por la Unidad de Transparencia, el requirente dedujo amparo al acceso a la información ante el Consejo y en contra de la Universidad de Chile, conforme al artículo 24 de la Ley N° 20.285.

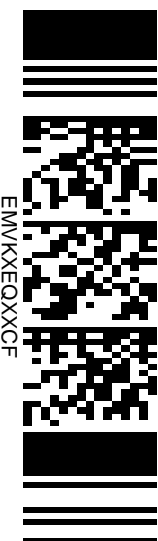
Admitido a tramitación el amparo, mediante Oficio N° E14701, de fecha 09 de julio de 2021, el Consejo confirió traslado al Sr. Rector de la Universidad de Chile, notificándole el reclamo y permitiéndole formular descargos y observaciones.

Por Oficio D.J. (O) N° 0880, de 02 de agosto de 2021, del Sr. Director Jurídico (S) de la Universidad de Chile, dicha Casa de Estudios Superiores evacuó sus correspondientes descargos y observaciones ante el Consejo.

Pese a las alegaciones y fundamentos esgrimidos, por la Decisión de Amparo impugnada el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo presentado por el requirente y reclamante de amparo, ordenando a dicha Universidad entregarle *“1- todos los informes, análisis, resultados u otra expresión equivalente asociado al contrato suscrito por la Universidad con Iansa Alimentos S.A., de fecha 29 de enero de 2019, así como la Cesión efectuada por dicha entidad a LDA SpA, suscrita con fecha 2 de enero de 2020, y la Resolución Exenta (ADM) N°223 del Sr. Decano de la Facultad, de fecha 13 de mayo de 2020, aprobatoria de ambos instrumentos”.*

Alega que esta decisión infringe los artículos 3°, 4°, 5°, 10°, 11° letras a), b), c) y d), 20, 21, numerales 1 y 2, y 28° de la Ley N°20.285; y el artículo 8 de la Constitución Política de la República, por los siguientes motivos:

1. La Decisión reclamada ordena la entrega de información que no es pública, pues si bien, conforme al artículo 8 de la Constitución Política de la República, son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, lo cierto es que interpretando armónicamente con la Ley de Transparencia y la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, debe entenderse que la información pública son las decisiones formales del Estado, realizadas en ejercicio de potestades públicas, sus fundamentos y procedimientos. Esto no se cumpliría



EMV/KXEQXXCF

respecto de los informes y análisis requeridos, que fueron generados en virtud de contratos suscritos con empresas particulares: Iansa Alimentos S.A. y LDA SpA., por los cuales la Universidad de Chile prestó servicios a dichas empresas, en términos similares a los que cualquier laboratorio lo habría hecho.

Agrega que, si bien conforme al artículo 5 de la Ley de Transparencia, “es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración”, la información solicitada se elaboró con presupuesto privado, pagado por Iansa Alimentos S.A. y LDA SpA. Además, sostiene que nos encontramos frente a una triple excepción; por una parte, la Decisión reclamada exige entregar datos que el artículo 10° de la Ley N°20.285 no comprende como susceptibles de ser requeridos conforme al acceso a información (transparencia pasiva), pues no son actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos, ni es información elaborada con presupuesto público; tampoco corresponden a información pública conforme al principio de transparencia o al artículo 5° de la Ley N°20.285, porque no son actos o resoluciones, ni sus fundamentos, documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial o procedimientos que se utilicen para su dictación, ni es información elaborada con presupuesto público o que obre en poder de esta Institución, ya que son análisis que pertenecen a sus titulares; por último, tampoco son actos o resoluciones públicas, o sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, según dispone el artículo 8° inciso segundo de nuestra Carta Fundamental.

2. La Decisión reclamada ordena la entrega de información que afecta los derechos de terceros, por cuanto afecta derechos comerciales y económicos de la empresa LDA SpA, la cual manifestó ante la Unidad de Transparencia de la Universidad de Chile su oposición a la entrega de la información requerida por el solicitante, argumentando que los documentos solicitados contienen sus propias fórmulas para la fabricación y comercialización de alimento para perro, las cuales no son de conocimiento del público, ni del mercado, indicando que esa información ha sido resguardada por LDA, quien nunca ha entregado dichos antecedentes al público en general; y que constituye una ventaja competitiva para la compañía que, de ser divulgada, beneficiaría injustificadamente a los competidores, lo que el Consejo consideró como una defensa genérica pese a cumplir con los criterios fijados por la misma institución.



Además, sostiene que el contrato en virtud del cual se elaboró la información, por su naturaleza, implica la confidencialidad de aquélla, y que las normas de acreditación que rigen a los laboratorios de esta Universidad, como la ISO 17025 otorgada por el Instituto Nacional de Normalización (“INN”), suponen precisamente la confidencialidad de los análisis encargados por un particular ante esta Casa de Estudios Superiores.

3. La Decisión reclamada afecta el funcionamiento de la Universidad de Chile, pues su cumplimiento afectaría gravemente la confiabilidad y prestigio institucional de la recurrente, arriesgándose a la pérdida de la acreditación ISO 17025 otorgada por el INN.

SEGUNDO: Que el Consejo Para la Transparencia evacuó informe solicitando su rechazo con costas, por los siguientes motivos:

Plantea que el recurso es inadmisibile por el inciso 2° del Art. 28 de la Ley de Transparencia, que expresamente prohíbe a los órganos de la Administración del Estado, reclamar de ilegalidad ante esta Corte de Apelaciones, de la resolución del Consejo para la Transparencia que otorgó acceso a la información que el organismo público requerido denegó, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del N° 1 del Art. 21 de la Ley de Transparencia, lo que importa que la Universidad de Chile, en tanto órgano de la Administración del Estado, carece de legitimación activa para deducir la presente impugnación basada en la causal de reserva alegada.

La universidad carece de legitimación activa para invocar en sede judicial la causal de reserva del art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto la empresa LDA SPA fue notificada en todas las etapas del procedimiento, inclusive de la decisión de amparo, siendo dicha empresa la única titular de los derechos cuya vulneración se alega, no pudiendo subrogarse en ellos el órgano reclamante.

El recurrente invocó nuevos argumentos en sede judicial consistentes en que la información solicitada no estaría cubierta por el art. 8° inciso 2° de la constitución, el que –según indica- se limita a las decisiones formales del estado, sus fundamentos y procedimientos. Por lo tanto, su invocación extemporánea infringe el principio de congruencia procesal, el de igualdad de armas y el de buena fe procesal.

La información cuya publicidad se controvierte es pública en virtud de lo dispuesto en el art. 8° inciso 2° de la Constitución Política y los artículos 5°, 10° y 11, letra c), de la Ley de Transparencia, en la medida que obra en poder de un órgano de la administración del estado. Precisa que la Carta Fundamental no establece que sólo los actos administrativos formales o



terminales sean objeto del derecho de acceso a la información, ni que únicamente los procedimientos administrativos formales, sean susceptibles de derecho de acceso a la información, pues no establece un catálogo taxativo de información pública, sino que utiliza las expresiones actos, resoluciones, sus fundamentos y los procedimientos que utilicen los órganos del Estado, sin reconducirlos expresamente a los actos y resoluciones o procedimientos definidos en la Ley N° 19.880.

El amparo por denegación de acceso a la información fue acogido parcialmente por cuanto dicho consejo estimó que no se configuraban las causales de reserva del artículo 21 N°s 1 y 2 de la Ley de Transparencia, ya que no fueron acreditados los presupuestos que la conforman, toda vez que la información solicitada no tiene la potencialidad de afectar el debido cumplimiento de las funciones de la universidad, ni implica afectar los derechos de LDA SPA. Precisa que en el acto recurrido se pronunció en el siguiente sentido:

“En los descargos evacuados en el proceso de amparo, las reclamantes sólo se limitaron a exponer de modo genérico que la información es parte importante de su estrategia comercial y que su conocimiento es susceptible de afectar su posición competitiva. De tal modo, el CPLT no pudo apreciar de los antecedentes del proceso que los volúmenes de venta y puertos de destino correspondieran a información estratégica o reveladora de un conocimiento sobre un producto o procedimiento industrial, dada la ausencia de elementos proporcionados en ese sentido. Visto que los terceros interesados no especificaron detalladamente el modo en que sus derechos resultaban perjudicados, y que tal afectación no resultaba evidente, no logró configurarse en el proceso de amparo aquella expectativa razonable de daño que se requiere para declarar la procedencia de la causal de reserva invocada, la que por ende fue debidamente rechazada”.

TERCERO: Que Diego Gallegos Vallejos, por sí y en representación del Colegio Médico Veterinario de Chile A.G (COLMEVET), presentó descargos como tercero interesado, solicitando el rechazo con costas del reclamo, indicando lo siguiente:

El requerimiento de información que dio origen a estos autos lo interpuso dado que entre los meses de marzo y octubre de 2020 la institución que representa comenzó a recibir denuncias de médicos veterinarios que alertaban sobre intoxicación alimentaria en sus pacientes. De esa forma, lo solicitado es información de interés público, puesto que incide en una intoxicación masiva de animales (perros) causada por productos fabricados



por LDA SpA y certificados por la Universidad de Chile. Por los mismos hechos se habrían generado procesos ante el SAG y el SERNAC., donde se acreditó que los productos referidos no eran idóneos para el consumo de mascotas y otras especies, cuestión que estaba en conocimiento del productor desde septiembre de ese año al menos.

La Universidad de Chile, antes de la resolución 474/2021 del SAG negó la existencia de la información que ahora se niega a entregar.

La información en cuestión es pública puesto que el insumo de la certificación es una comunicación al público garantizando aspectos de los productos fabricados por LDA SpA, es decir, la certificación que LDA SpA presumía en sus envases.

La publicidad de dicha información no afecta derechos de terceros por cuanto, en el acuerdo con el SERNAC, en el proceso voluntario colectivo, dicha fórmula de fabricación sufrió modificaciones, por lo que la contenida en la información solicitada ni siquiera se encuentra vigente. Además, aun existiendo una cláusula de confidencialidad, se estaría ante una hipótesis típica en la que las cláusulas de confidencialidad contemplan la divulgación de la información.

La afectación al funcionamiento de la Universidad de Chile, basada en un deterioro de su prestigio, no sería atribuible a la divulgación misma de la información, sino al hecho de haber certificado alimentos para mascotas que los terminaron matando.

CUARTO: Que la Universidad de Chile interpuso en esta causa requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 3°; 4°; 5°; 10, inciso segundo; 11,letras a), b), c) y d); y 28,inciso segundo, de la ley N° 20.285, ante el Tribunal Constitucional, el cual fue acogido en todas sus partes por sentencia de 15 de diciembre de 2022.

QUINTO: Que en el ingreso contencioso administrativo 543-2021, acumulado a estos autos, comparece Aldo Molinari Valdés, abogado, en representación de LDA SpA, (en adelante, indistintamente, “LDA” o la “Compañía”), en calidad de tercero afectado en Amparo al Derecho de Acceso a la Información Causa Rol N° C4572-21 del Consejo para la Transparencia, interponiendo reclamo de ilegalidad en contra de la Resolución del Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente “Consejo” o “CPLT”, que contiene la decisión del Procedimiento de Amparo Rol N° C4572-21, ya referida supra, solicitando a S.S.I. se revoque la decisión en ella contenida, con expresa condena en costas, por los siguientes motivos:



La información solicitada es secreta, pues cumple con los criterios establecidos por el propio Consejo para la Transparencia, es decir: (i) Que la información sea secreta, entendiendo por tal aquella que no sea generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas en los círculos en que normalmente se utiliza dicha información. (ii) Que la información tenga o se le asigne un valor comercial por el hecho de ser secreta. (iii) Que la misma haya sido objeto de medidas para mantenerla en secreto, por parte de quien legítimamente la controle.

Igualmente cumple con los criterios de la Excma. Corte Suprema para estimar que su publicidad afecta derechos económicos y comerciales de una persona: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afecte significativamente su desenvolvimiento competitivo).

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"), a efectos de dotar de contenido al concepto antes referido, ha entregado en su sitio web oficial una serie de ejemplos que importarían casos cubiertos por el artículo 86 antes citado. Así, se desprende de lo señalado por INAPI que, entre otros, los siguientes antecedentes se encuentran protegidos por el "secreto industrial o empresarial" : (i) Los procesos, técnicas y conocimientos de fabricación; (ii) Las recopilaciones de datos; (iii) Las fórmulas de fabricación de productos; (iv) Las estrategias comerciales, los planes de actividades, planes de exportación y planes de comercialización; (v) Manuales; (vi) Ingredientes; e (vii) Información sobre actividades de investigación y desarrollo (I+D).

La información es exclusivamente de uso interno de la Compañía, de carácter confidencial, constituyendo parte importante de su secreto empresarial, al tratarse de información estratégica para su posición competitiva.

Los antecedentes requeridos pueden ser comprendidos dentro del concepto de "estrategias comerciales" o "planes de actividad", toda vez que la solicitud, al tener un carácter tan amplio, incluye la obtención de los contratos, cesiones, resultados, informes y análisis que se generaron, respecto de los alimentos para mascotas producidos por LDA SpA en su planta ubicada en la comuna de Paine, y analizados por la Universidad de Chile en el desarrollo



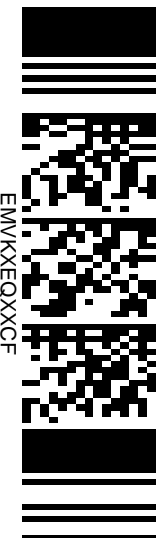
de su giro principal y esencial. Luego, la misma a su vez puede ser incorporada dentro de la información derivada de actividades de investigación y desarrollo (I+D).

SEXTO: Que el Consejo para la Transparencia evacuó traslado, solicitando el rechazo del recurso, por los siguientes motivos:

La información cuya publicidad se controvierte es pública en virtud de lo dispuesto en el art. 8° inciso 2° de la Constitución Política y los art. 5°, 10° y 11, letra c), de la Ley de Transparencia, en la medida que obra en poder de un órgano de la administración del estado. Precisa que la Carta Fundamental no establece que sólo los actos administrativos formales o terminales sean objeto del derecho de acceso a la información, ni que únicamente los procedimientos administrativos formales, sean susceptibles de derecho de acceso a la información, pues no establece un catálogo taxativo de información pública, sino que utiliza las expresiones actos, resoluciones, sus fundamentos y los procedimientos que utilicen los órganos del Estado, sin reconducirlos expresamente a los actos y resoluciones o procedimientos definidos en la Ley N° 19.880.

El amparo por denegación de acceso a la información fue acogido parcialmente por cuanto dicho consejo estimó que no se configuraban las causales de reserva del artículo 21 N°s 1 y 2 de la Ley de Transparencia, ya que no fueron acreditados los presupuestos que la conforman, toda vez que la información solicitada no tiene la potencialidad de afectar el debido cumplimiento de las funciones de la universidad, ni implica afectar los derechos de LDA SPA. Precisa que en el acto recurrido se pronunció en el siguiente sentido:

“En los descargos evacuados en el proceso de amparo, las reclamantes sólo se limitaron a exponer de modo genérico que la información es parte importante de su estrategia comercial y que su conocimiento es susceptible de afectar su posición competitiva. De tal modo, el CPLT no pudo apreciar de los antecedentes del proceso que los volúmenes de venta y puertos de destino correspondieran a información estratégica o reveladora de un conocimiento sobre un producto o procedimiento industrial, dada la ausencia de elementos proporcionados en ese sentido. Visto que los terceros interesados no especificaron detalladamente el modo en que sus derechos resultaban perjudicados, y que tal afectación no resultaba evidente, no logró configurarse en el proceso de amparo aquella expectativa razonable de daño que se requiere para declarar la procedencia de la causal de reserva invocada, la que por ende fue debidamente rechazada”.



EMV/KXEQXXCF

No resulta procedente la condena en costas al consejo para la transparencia en la resolución de los reclamos de ilegalidad, pues la reclamante de ilegalidad pretende que se sancione con la condena en costas al órgano que por ley debe ejercer una facultad de resolver Amparos por Denegación de Acceso a la Información, por la sola circunstancia de no quedar conforme con lo resuelto.

SÉPTIMO: Que el objetivo de la ley N° 20.285, según su moción parlamentaria, es el derecho al libre acceso a las fuentes públicas de información, entendido como la posibilidad real de la ciudadanía de tomar conocimiento de los actos de la administración del estado y de la documentación que sustenta tales actos. Este derecho constituye un elemento fundamental para alcanzar un alto grado de transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, a la vez que facilita la formación de una mayor y más efectiva participación ciudadana en los asuntos públicos. La nueva norma busca resguardar el principio de publicidad de los organismos públicos y el derecho de las personas a informarse del funcionamiento de los mismos, de modo de reforzar el rol fiscalizador de la ciudadanía y evitar así abusos de poder y actos de corrupción.

OCTAVO: Que conforme se ha indicado, esta ley vino a regular una nueva institucionalidad para promover y garantizar la transparencia, lo que permite estimar que la regla general es la publicidad y acceso a la información pública, siendo la excepción las causales de reserva del artículo 21 de la referida ley u otras que establezca una ley de quorum calificado. En efecto, el artículo 8 inciso 2 de la Constitución Política de la República indica que sólo una ley de quórum calificado puede establecer la reserva o secreto cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional.

NOVENO: Que de la norma referida en la Constitución es posible advertir que la regla general es la publicidad de los actos de la Administración del Estado así como los fundamentos y procedimientos que se utilicen. En consecuencia habrá que determinar si la información solicitada es pública o bajo reserva y que pueda afectar datos sensibles o personales. Sobre el particular, el artículo 21, números 1 y 2, de la Ley de Transparencia, dispone:

“Artículo 21. Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:



1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:

a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.

b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas.

c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

2.- Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”.

DÉCIMO: Que analizado lo anterior, lo que se pide por el solicitante de información, y denegado por la Universidad de Chile, por supuestamente concurrir las causales de reserva del artículo 21 N°s 1 y 2 de la Ley 20.285, será descartado, toda vez que tal como correctamente lo entendió el CLPT no se configuraban dichas causales de reserva, ya que no fueron acreditados los presupuestos que la conforman, toda vez que la información solicitada no tiene la potencialidad de afectar el debido cumplimiento de las funciones de la Universidad de Chile, ni implica afectar los derechos de LDA SPA, lo que no fue probado en el proceso administrativo.

UNDÉCIMO: Que en la especie no se advierte de qué forma la entrega de la información requerida afecte los derechos de carácter comercial o económico de la Universidad de Chile o de LDA SPA, al dar a conocer una información que estiman comercialmente sensible, lo que no fue debidamente justificado. En efecto, de la solicitud no se observa que se entreguen secretos comerciales que pueden afectar derechos comerciales y económicos y, en el proceso ante el CPLT, no se acreditó una expectativa razonable de daño, puesto que no se indicó de forma específica de qué manera se produce una afectación, descartando una falta de ponderación en la decisión del Consejo entre los derechos a la obtención de la información con derechos constitucionales como sostienen los reclamantes.



Es dable considerar, además, que la fórmula o composición de los alimentos figura en los envases de los mismos, circunstancia por la cual no podría considerarse como de carácter secreta, tampoco.

DUODÉCIMO: Que descartadas las infracciones denunciadas y existiendo un interés social que justifica el acceso a la información, y de una interpretación armónica de las normas citadas se desprende que el principio de transparencia y publicidad es la norma general para los organismos públicos, y la negativa a entregar información sólo debe sustentarse en causales legales o constitucionales expresas, que en la especie no concurren.

Por lo anterior, Universidad de Chile debe entregar la información solicitada, toda vez que la negativa no se sustentó en ninguna de las causales que habilitan para hacerlo.

DÉCIMO TERCERO: Que, por lo anterior, los reclamos de ilegalidad deben desestimarse.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 20.285, **se rechazan**, sin costas, los reclamos de ilegalidad deducidos en estos antecedentes en contra de la Decisión de Amparo Rol C4572-21 del Consejo para la Transparencia, de fecha 12 de octubre de 2021.

Redacción del abogado integrante Sr. Jorge Francisco Balmaceda Hoyos.

Regístrese y comuníquese.

N°Cont.Adm 542-2021.

Pronunciada por la **Octava Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Miguel Vázquez Plaza e integrada por la Ministra señora Inelie Durán Madina y el Abogado Integrante señor Jorge Balmaceda Hoyos. No firman la Ministra señora Durán y el Abogado Integrante señor Balmaceda, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por encontrarse ausentes.

EMV/KXEQXXCF

Proveído por el Señor Presidente de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a catorce de marzo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

